

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA

Sentencia 144/2026, de 15 de enero de 2026

Sala de lo Social

Rec. n.º 3564/2025

SUMARIO:

Extinción de la relación laboral por incumplimiento del empresario. Empresa que implanta un sistema de fichaje mediante reconocimiento facial sin consultar ni contar con el consentimiento de los trabajadores.

Vulneración del derecho a la intimidad y a la propia imagen. Indemnización por daños y perjuicios. En el caso analizado debe entenderse que existió vulneración del derecho fundamental a la propia imagen, pero no del derecho fundamental a la intimidad. Así, el derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE) se configura como un derecho fundamental estrictamente vinculado a la personalidad, que deriva de la dignidad de la persona que el artículo 10.1 de la CE reconoce, e implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás. Este derecho atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado frente al conocimiento y la divulgación del mismo por terceros y frente a una publicidad no querida. En este contexto, se produjo una injerencia en el derecho fundamental a la propia imagen de la trabajadora por la utilización de datos biométricos faciales, pero no, en sentido estricto, en su intimidad, pues el rostro no es en principio una zona reservada al conocimiento de otras personas, en este caso el empresario. Sí hubo, por lo tanto, una infracción del derecho fundamental a la propia imagen (art. 18.1 CE) el cual se configura como un derecho de la personalidad, que atribuye a su titular la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico que permita su identificación, lo que conlleva tanto el derecho a determinar la información gráfica generada por los rasgos físicos que le hagan reconocible, que puede ser captada o tener difusión pública, como el derecho a impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por un tercero no autorizado. Tal derecho a la propia imagen en este caso está relacionado con el derecho fundamental a la protección de los datos personales. El sistema de reconocimiento facial, en tanto emplea datos biométricos, tiene que cumplir con las exigencias del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, el cual prohíbe el tratamiento de los datos personales si no se cumple algunas de las condiciones recogidas en su artículo 6.1, entre ellas, el consentimiento del interesado/a, que no consta en el supuesto de autos, o la necesidad del tratamiento en determinados casos. Pero en el caso de autos el tratamiento no era necesario, por cuanto existían otros medios para el registro de la jornada y del horario sin injerencia en derechos fundamentales, como es el control mediante una tarjeta. Además, estamos ante una categoría especial de datos personales (datos biométricos) del artículo 9 del Reglamento, cuya regla general es la prohibición del tratamiento (art. 9.1). Todo ello sin que se acredite el consentimiento de la persona interesada (art. 9.2 a), ni ninguna de las excepciones previstas en el artículo 9.2. En concreto no alegó la parte demandada la aplicación del artículo 9.2 b), en el ámbito laboral, que requeriría tanto una autorización reglamentaria expresa, como el establecimiento de garantías para los derechos o intereses fundamentales del interesado/a, lo que no consta en los hechos probados. Además de que, en todo caso, no concurre el requisito de necesidad en el uso de los datos biométricos, puesto que existen otros medios eficaces para el registro de la jornada sin injerencia en los derechos fundamentales. A lo expuesto debe añadirse que existieron retrasos continuados en el pago de las nóminas durante más de un año, lo que justifica

Síguenos en...



la extinción de la relación laboral por coexistir distintos incumplimientos graves de la empresa, los derivados de la infracción del artículo 50.1 b) del ET - retrasos continuados y reiterados en el abono del salario- y los procedentes de la vulneración del derecho fundamental a la propia imagen y a la protección de datos personales (art. 50.1 c) del ET), teniendo derecho la trabajadora a la indemnización correspondiente al despido improcedente (46.266,90 euros), junto al abono de una indemnización por daños morales de 7501 euros.

PONENTE:

Don Carlos Villarino Moure

SENTENCIA

T.S.X.GALICIA SALA DO SOCIAL
A CORUÑA
SENTENCIA: 00144/2026
PLAZA DE GALICIA, S/N 15071 A CORUÑA
Tfno:981-184845/4992
Fax:---
Correo electrónico:sala1.social.tsxg@xustiza.gal
NIG:36057 44 4 2025 0000779
Equipo/usuario: MR
Modelo: 402250 SENTENCIA RESUELVE REC DE SUPPLICACIÓN DE ST
SECRETARIA SRª IGLESIAS FUNGUEIRO
RSU RECURSO SUPPLICACION 0003564 /2025MRA
Procedimiento origen: DSP DESPIDOS / CESES EN GENERAL 0000119 /2025
Sobre: DESPIDO DISCIPLINARIO
RECURRENTE/S D/ña Victoria, MAKE PACKING SL , ART & GRAPHIC PACKAGING

SL

ABOGADO/A: AMAYA INSUA FERNANDEZ, AMAYA INSUA FERNANDEZ
PROCURADOR: , ,
GRADUADO/A SOCIAL:GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ, ,
RECURRIDO/S D/ña:
ABOGADO/A:
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:
ILMA SRª Dª PILAR YEBRA PIMENTEL VILAR
ILMA SRª Dª BEATRIZ RAMA INSUA
ILMO SR. D. CARLOS VILLARINO MOURE

Na CORUÑA, a quince de Xaneiro de dous mil vinte e cinco

Tras ver e deliberado as presentes actuacións, a T.S.X. GALICIA SALGA DO SOCIAL, de acordo con o previsto no artigo 117.1 da Constitución Española,
NO NOME DA S.M O REY
E POLA AUTORIDADE QUE LLE CONFIERE
O POBO ESPAÑOL
ronunciou a seguinte
S E N T E N Z A

No RECURSO SUPPLICACION 0003564/2025, formalizado polo Letrado DON GABRIEL GONZALEZ RODRIGUEZ, en nome e representación de Victoria, pola Letrada DOÑA AMAYA INSUA FERNANDEZ, en nome e representación de DO MAKE PACKING SL, ART & GRAPHIC PACKAGING SL, contra a sentenza número 160/2025 dictada por PLAZA Nº 1 DE LA SECCION DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL DE INSTANCIA de VIGO en el procedimiento DESPIDOS/CESES EN GENERAL 0000119/2025, seguidos a instancia de Victoria fronte a

Síguenos en...

MAKE PACKING SL, ART & GRAPHIC PACKAGING SL, sendo Maxistrado-Relator o/a Ilmo/a Sr/Sra D/Dª CARLOS VILLARINO MOURE.

Das actuacións se deducense os seguintes:

ANTECEDENTES DE FEITO

PRIMEIRO:

D/Dª Victoria presentou demanda contra MAKE PACKING SL, ART & GRAPHIC PACKAGING SL, sendo turnada para o seu coñecemento e axuizamento ao sinalado Xulgado do Social, o cal, ditou sentenza número 160/2025, de fecha nove de abril de dous mil vinte e cinco.

SEGUNDO:

Na sentenza contra a que se recorre en suplicación recolléronse os seguintes feitos probados:

"Primero.-La demandante Dª. Victoria, mayor de edad y con D. N. I. número NUM000, vino prestando servicios para la empresa AC Pack, S.L. desde el día 21 de agosto de 2007, siendo subrogada por Make Packing, S.L. el 1 de marzo de 2020, con la categoría profesional de Ofi.Cual.Trei.tecn-NI.9 y un salario mensual de 2.117,81 euros, incluido prorrateo de pagas extraordinarias. **/Segundo.**-Solicita la actora la rescisión de su contrato en base a que alega que se le vienen abonando los salarios con retraso desde hace años, concretando en demanda el año 2024, y alegando asimismo que la empresa realizaba el fichaje a través de reconocimiento facial y por ello solicita una indemnización de 7.501 euros. **/Tercero.**-La empresa y la representación de los trabajadores tuvieron reuniones en fechas 7 de noviembre de 2022, 18 de abril de 2023 y 30 de enero y 23 de octubre de 2024 con motivo del retraso en el abono de los salarios y la empresa se comprometió a abonarlos antes del día 5 de cada mes y tratar de conseguir abonarlos el día 1. **/Cuarto.**-Desde el 1 de enero de 2024 hasta marzo del presente año la empresa ordenó la transferencia de las nóminas de la actora desde el Banco Sabadell en las siguientes fechas: 8 de febrero, 8 de marzo, 11 de abril, 23 de mayo, 20 de junio, 5 de julio la paga extra, 19 de julio, 22 de agosto, 2 de octubre, 17 de octubre, 12 de noviembre, 12 de diciembre, 23 de diciembre la paga extra, 10 de enero, 12 de febrero, 14 de marzo y 4 de abril.

La trabajadora las recibió en su cuenta bancaria en Bankinter en las siguientes fechas: 9 de febrero, 11 de marzo, 12 de abril, 27 de mayo, 21 de junio, 22 de julio, 23 de agosto, 3 de octubre, 18 de octubre, 13 de noviembre, 16 de diciembre, 13 de enero, 13 de febrero, 14 de marzo y no consta la de abril. **/Quinto.**-La empresa, sin consultar ni contar con el consentimiento de los trabajadores, implantó un sistema de fichaje mediante reconocimiento facial el 9 de marzo de 2023 y lo desinstaló el 20 de febrero de 2025, operaciones que la empresa instaladora facturó a la codemandada Art & Graphic Packaging, S.L., a cuyos trabajadores no se les aplicó dicho sistema. **/Sexto.**-Make Packing, S.L. tiene como socio único a la codemandada Art & Graphic Packaging, S.L., inició sus operaciones el 6 de agosto de 2019, su objeto es la fabricación y transformación de productos de cartón, papel y derivados. Su domicilio está en Culleredo, su capital es de 3.100 y su administrador único es D. Gabino. Art & Graphic Packaging, S.L. tiene el mismo domicilio y administrador que la precedente. Se constituyó el 21 de septiembre de 2015, su capital es de 305.000 euros y su objeto es el diseño, desarrollo, producción, comercialización y distribución de empaque, envase o embalaje de productos.

Las empresas se facturan una a la otra los servicios prestados. **/Séptimo.**-Presentada papeleta de conciliación ante el S.M.A.C. el día 22 de enero, la misma tuvo lugar el día 11 de febrero con el resultado de sin avenencia."

TERCERO:

Na sentenza contra a que se recorre en suplicación emitíuse a seguinte decisión: "Que estimando en parte la demanda interpuesta por Dª. Victoria, debo declarar y declaro la existencia de vulneración de sus derechos a la intimidad y propia imagen y condeno de forma

solidaria a las empresas Make Packing, S.L. y Art & Graphic Packaging, S.L. a que por ello le abonen una indemnización de daños y perjuicios de 7.501 euros, desestimando las demás pretensiones deducidas en la demanda, de las que absuelvo a dichas sociedades."

CUARTO:

Contra a devandita sentenza interpuxo a parte demandante e tamén as empresas demandadas recursos de suplicación, que foron impugnados de contrario. Elevados os autos a este Tribunal, dispúxose o seu pase ao relator, procedéndose a ditar a presente sentenza tras a deliberación correspondente.

Á vista dos anteriores antecedentes de feito, esta Sección de Sala formula os seguintes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMEIRO. Motivo do art. 193 a) e c) LRXS

A traballadora demandante recorre, en primeiro lugar, ao abeiro do art. 193 a) LRXS - *"Repoñer os autos ao estado en que se encontraban no momento de se cometer unha infracción de normas ou garantías do procedemento que producise indefensión"*. Alega que se produciu unha infracción dos arts. 410 e 411 LAC, en relación co art. 24 CE.

Argumenta, en síntese, que a sentenza de instancia aplica unha norma xurídica que non estaba en vigor no momento no cal tiveron lugar os incumprimentos no aboamento do salario, ni cando foi presentada a demanda. Por iso solicita, con carácter subsidiario á resolución sobre o fondo pola Sala de suplicación, que se repoñan os autos ao momento da indefensión alegada.

As empresas demandadas, na súa impugnación, solicitan o rexeitamento do motivo de recurso, por non existir a infracción alegada.

Imos rexeitar o motivo de recurso. Os nosos argumentos son os seguintes:

En canto ao motivo de recurso do art. 193 a) LRXS, imos recordar que, como xa se indicou na STSX de Galicia do 31 de marzo de 2015 (rec: 4233/2014):

"Ha de tenerse en cuenta que la nulidad de actuaciones es siempre un remedio de carácter excepcional al que debe acudirse cuando efectivamente se haya producido una vulneración de normas procesales esenciales que no sea posible subsanar por otros medios y que tal infracción haya producido indefensión a la parte que la denuncia. El Tribunal Constitucional viene declarando, al respecto que no existe indefensión cuando «no se llega a producir efectivo y real menoscabo del derecho de defensa» y tampoco cuando «ha existido posibilidad de defenderse en términos reales y efectivos», por lo que «no puede equipararse con cualquier infracción o vulneración de normas procesales, sino únicamente cuando el interesado, de modo injustificado, ve cerrada la posibilidad de impetrar la protección judicial o cuando la vulneración de las normas procesales lleva consigo la privación del derecho a la defensa, con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado», de manera que la referida indefensión no puede ser aducida por quien no actuó en el proceso con la debida diligencia o cuando aquélla resulta imputable a su propia conducta (SSTC 135/1986 ; 98/1987 ; 41/1989, de 16 febrero ; 207/1989 ; 145/1990, de 1 octubre ; 6/1992 ; 289/1993).

No todas las infracciones de normas procesales implican el mencionado excepcional efecto de la nulidad de pleno derecho, cuya declaración ha de reservarse, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia, para cuando dicha infracción haya producido la referida indefensión. En efecto, el art. 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985\1578, 2635 y ApNDL 8375) limita la nulidad de pleno derecho "....c) cuando se prescinda total y absolutamente de las normas esenciales de procedimiento establecidas por la Ley o con infracción de los principios de audiencia, asistencia y defensa, siempre que efectivamente se haya producido indefensión".

Por otro lado, debe tenerse presente que la nulidad de actuaciones es siempre un remedio extraordinario y excepcional, contrario al principio de economía procesal propio del proceso laboral que debe limitarse a aquellos supuestos en que se cause material indefensión

(STC de 15 de noviembre de 1991, RTC 1991\218, y de 21 de noviembre de 1995, RTC 1995\172)..."

Entrando xa no caso de autos, a sentenza de instancia recoñece que a LO 1/2025, que modifica o art. 50 ET concretando a causa de extinción do apartado 1 b), entrou en vigor o 3 de abril de 2025 (FX 1º).

A norma citada non estaba en vigor no momento dos incumprimentos alegados anteriores ao 3-4-25, pero si o estaría no caso do retraso no aboamento da nómina de marzo de 2025, que non foi aboada antes do día 5 do mes abril segundo os FFPP 3º e 4º.

Pero, sexa como for, o certo é que a sentenza de instancia toma o criterio da reforma citada só a efectos de interpretación da norma vixente no momento dos anteriores incumprimentos (FX 1º), polo tanto cun carácter meramente interpretativo, unha vez que a causa de extinción de falta de pago ou retrasos continuados xa estaba no ET con anterioridade.

Por todo iso, non entendemos que exista unha infracción do art. 193 a) LRXS.

SEGUNDO. Revisión de feitos probados do art. 193 b) LRXS

A parte demandante, no seu escrito de recurso, discute os feitos probados da sentenza de instancia, ao abeiro do art. 193 b) LRXS *-Revisar os feitos declarados probados, á vista das probas documentais e periciais practicadas-*.

A xurisprudencia do Tribunal Supremo e a doutrina dos tribunais superiores que interpreta o precepto citado veñen esixindo, para acoller unha revisión de feitos en aplicación do art. 193 b) LRXS:

(1) Que tal revisión se funde nun medio de proba hábil. Co art. 193. b) LRXS ten que tratarse de proba documental ou pericial. Non se recollen dentro da proba documental ou pericial os informes de investigadores privados (STS 24 febreiro 1992). Tampouco os medios de reprodución da palabra, da imaxe ou do son (STS 16 xuño 2011), pero o Tribunal Supremo matizou a súa xurisprudencia na STS do 23 de xullo de 2020 (rec. 239/2018), en relación cos documentos presentados en soporte electrónico (correos electrónicos etc.).

(2) Que a proba alegada revele un erro do xulgador, de modo manifesto, sen necesidade de conxecturas, nin hipóteses ou razoamentos. Fóra do suposto referido, prevalecerá a apreciación dos feitos polo órgano de instancia, en especial no caso de que a proba invocada resulte contradita por outros medios de proba (SSTC núm. 44/1989 do 20-2-89; e SSTS do 24/1990 e 15-2-1990; e SSTS do 30-10-91, 22-5-93, 16-12-93 e 10-3-94-).

En tal sentido, sinalou a STS do 23 de xullo de 2020 (rec. 239/2018), en relación con iso, que:

"En definitiva, no puede pretender el recurrente, de nuevo, la valoración total de las pruebas practicadas o una valoración distinta de una prueba que el juzgador a quo ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado. Por ello, la jurisprudencia excluye que la revisión fáctica pueda fundarse "salvo en supuestos de error palmario [...] en el mismo documento en que se ha basado la sentencia impugnada para sentar sus conclusiones, pues como la valoración de la prueba corresponde al Juzgador y no a las partes, no es posible sustituir el criterio objetivo de aquél por el subjetivo juicio de evaluación personal de la recurrente" (sentencias del TS de 6 de junio de 2012, recurso 166/2011 ; 19 de febrero de 2020, recurso 183/2018 y 17 de marzo de 2020, recurso 136/2018 , con cita de otras muchas)."

(3) Debe ter tal revisión transcendencia para modificar a decisión de instancia - SSTS do 16-04-14 (rec. 261/13); e 25-05-14 (rec. 276/13)-. En relación con iso, matizou o Tribunal Supremo que:

"...pese a que sea exigencia de toda variación fáctica que la misma determine el cambio de sentido en la parte dispositiva, en ocasiones, cuando refuerza argumentalmente el sentido del fallo no puede decirse que sea irrelevante a los efectos resolutorios, y esta circunstancia proporciona justificación para incorporarla al relato de hechos, cumplido -eso sí- el requisito de tener indubitado soporte documental" (STS 14-6-2018; rec. 189/2017).

(4) A modificación proposta non debe conter valoracións xurídicas predeterminantes da resolución. Así, sinalou o Tribunal Supremo que:

"...la modificación o adición que se pretende no sólo debe cumplir la exigencia positiva de ser relevante a los efectos de la litis, sino también la negativa de no comportar valoraciones jurídicas (SSTs 27/01/04 -rc 65/02 -; 11/11/09 -rc 38/08 -; y 20/03/12 -rc 18/11 -), pues éstas no tienen cabida entre los HDP y de constar se deben tener por no puestas, siendo así que las calificaciones jurídicas que sean determinantes del fallo tienen exclusiva -y adecuada- ubicación en la fundamentación jurídica (SSTs 07/06/94 -rc 2797/93 -; ... 06/06/12 -rc 166/11 -; y 18/06/13 -rc 108/12 -)."- STS 14-6-2018 (rec. 189/2017)-.

(5) E esíxense determinados requisitos formais na interposición do recurso de acordo co art. 196.2 e 3 LRXS, que afectan directamente o motivo de revisión de feitos probados do art. 193 b) LRXS. E así: a) que se concrete con precisión e claridade o feito que foi negado ou omitido, propoñendo unha redacción alternativa dos feitos probados; e b), que se precise a través de que concreto medio de proba hábil para os efectos de suplicación se pretende esa revisión -por todas, SSTSX Galicia do 16-09-15 (rec. 1353/14); 12-06-15 (rec. 4364/13); 14-05-15 (rec. 4385/13); 09-03-15 (rec. 3395/13); 11-02-15 (rec. 970/13); 20-01-15 (rec. 3950/14).

A parte demandante solicita a revisión do feito declarado probado terceiro, para que teña a redacción que figura na páxina 6 do seu escrito de recurso. Alega para isto o documento núm. 4.5 da súa proba.

Imos acoller a revisión proposta, por canto así resulta do documento referido que é a acta da reunión do 30-1-24 que xa sinala o propio feito probado. Polo tanto, engadimos ao feito probado o seguinte contido:

"...En el acta de la reunión de fecha 30-1-24, que se tiene íntegramente por reproducida, se recoge:

Máquina registro de horario de jornada.

Por la representación de los trabajadores se indica que no está permitido el registro por huella ni reconocimiento facial.

Ya se ha solicitado a la empresa instaladora que modifique el registro de jornada, para lo que se emitirán las correspondientes tarjetas personalizadas a cada trabajador".

TERCEIRO. Motivo do art. 193 c) LRXS das demandadas

As empresas demandadas recorren ao abeiro do art. 193 c) LRXS. Formulan o seguinte motivo de recurso:

Alegan a infracción do art. 5.1 c) e do art. 35.1 do Regulamento (UE) 206/679 (RXPd), así como dos arts. 8.11 e 39 LISOS.

Argumentan que a sentenza entende que existe unha vulneración de dereitos fundamentais polo sistema de control do horario e xornada mediante recoñecemento facial, pero non todo uso de tecnoloxía biométrica é ilícito. Tamén sinalan que non existiu un dano acreditado, e que a normativa era nova e debatida, sen que no caso de autos fosen almacenados os datos biométricos, ademais de que o terminal estaba protexido. Tamén manifestan que non se aplicou o sistema de recoñecemento facial ás persoas traballadoras de Art & Graphic Packaging SL. E que non se afectou o dereito á intimidade, honra ou propia imaxe, senón, no seu caso, o dereito fundamental á protección de datos persoais. Ademais sinala que a LISOS é unha norma administrativa sancionadora e que a indemnización é desproporcionada.

Por iso solicita a revogación da sentenza de instancia e o rexeitamento da demanda.

A parte demandante, na súa impugnación, solicita o rexeitamento do recurso por non existir a infracción alegada.

Imos acoller en parte o recurso, consonte os seguintes argumentos:

A sentenza de instancia entende que a instalación e o uso dun sistema de recoñecemento facial, para o control da xornada e horario entre o 9-3-2023 e o 20-2-25, levou consigo unha vulneración do dereito fundamental á intimidade e á propia imaxe.

Entendemos que, en sentido estrito, si existiu a vulneración do dereito fundamental á propia imaxe, pero non do dereito fundamental á intimidade.

O dereito fundamental á intimidade (art. 18.1 CE): *"se configura como un derecho fundamental estrictamente vinculado a la personalidad, que deriva de la dignidad de la persona*

que el art. 10.1 CE reconoce, e implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente la acción y el conocimiento de los demás. Por ello hemos sostenido que este derecho atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado frente al conocimiento y la divulgación del mismo por terceros y frente a una publicidad no querida"(STC 156/2001). No caso de autos houbo unha inxerencia no dereito fundamental á propia imaxe da traballadora polo uso dos datos biométricos faciais, pero non, en sentido estrito, da súa intimidade, en tanto o rostro non é en principio un ámbito reservado fronte ao coñecemento doutras persoas, neste caso da empregadora.

Si houbo, polo tanto, unha infracción do dereito fundamental á propia imaxe (art. 18.1 CE) o cal: *"se configura como un derecho de la personalidad, que atribuye a su titular la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico que permita su identificación, lo que conlleva tanto el derecho a determinar la información gráfica generada por los rasgos físicos que le hagan reconocible que puede ser captada o tener difusión pública, como el derecho a impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por un tercero no autorizado"*(STC 156/2001).

E isto por canto a súa imaxe facial foi empregada para empregar datos biométricos coa finalidade sinalada. Tal dereito á propia imaxe neste caso está en relación co dereito fundamental á protección dos datos persoais (art. 18.4 CE, STC núm. 292/2000, e art. 8.1 Carta de Dereitos Fundamentais da UE). E certo que a sentenza, na súa parte dispositiva, só fai referencia ao dereito fundamental á propia imaxe e á intimidade, pero nos seus fundamentos xurídicos aplica, de xeito expreso, a normativa sobre o dereito á protección de datos persoais (FX 2º). Polo tanto, posto que en todo caso existiu unha vulneración do dereito fundamental á propia imaxe, en relación con dereito á protección dos datos persoais, a sentenza ten que ser confirmada en canto a indemnización sinalada, aínda que deixando sen efecto a apreciación da vulneración do dereito á intimidade.

Por outra banda, o sistema de recoñecemento facial, en tanto emprega datos biométricos, ten que cumprir coas esixencias do RXPD (Regulamento (UE) 2016/679), o cal prohibe o tratamento dos datos persoais senón se cumpre algunhas das condicións recollidas no seu art. 6.1. Esas condicións son, en síntese, ben o consentimento do interesado/a, que non consta no suposto de autos, ben a necesidade do tratamento en determinados casos. Pero no caso de autos o tratamento non era necesario, por canto existían outros medios para o rexistro da xornada e do horario sen inxerencia en dereitos fundamentais, como é o control mediante unha tarxeta que a propia empresa sinalou na acta da reunión (FP 3º revisado).

Ademais, neste suposto estamos ante unha categoría especial de datos persoais (datos biométricos) do art. 9 RXPD, no cal a regra xeral é a prohibición do tratamento (art. 9.1). Todo iso sen que estea acreditada nin o consentimento da persoa interesada (art. 9.2 a), nin outra das excepcións previstas no art. 9.2 RXPD. En concreto non alegou a parte demandada a aplicación do art. 9.2 b), no caso do dereito laboral, o cal esixiría tanto unha habilitación normativa expresa, como o establecemento de garantías para os dereitos fundamentais o os intereses do interesado/a, o que non consta nos feitos probados. Ademais de que, en todo caso, non concorre, no caso de autos, o requisito da necesidade no emprego dos datos biométricos, posto que, como xa dixemos, existen outros medios efectivos para o rexistro da xornada sen inxerencia en dereitos fundamentais.

Por outra banda, en relación as outras alegacións das empresas recorrentes, temos que engadir que:

1º) O tratamento de datos persoais inclúe a mera recollida ou utilización (art. 4.2 RGPD), entre outros supostos.

2º) Toda vulneración de dereitos fundamentais leva consigo un dano moral -art. 183.1 LRXS, STS, Pleno, 20-4-22, rec. 2391/2019; STS 14-11-23, rec. 1975/2021), e para a súa indemnización a xurisprudencia admite o emprego da LISOS como orientación - STC 247/2006; STS do 5-2-2013 (rec: 89/2012); e STS do 15-2-2012 (rec: 67/2011)-. Ademais a sentenza xa explica que toma o importe mínimo da LISOS (7501 euros).

3º) O dereito fundamental á propia imaxe e á protección de datos persoais están na nosa CE no art. 18.1 e 4 CE. A existencia da prohibición infrinxida en canto ao tratamento dos datos persoais estaba en vigor ademais ao abeiro do RXPD da UE. E o TC xa sinalou, dende a STC núm. 292/2000, que o dereito á protección de datos persoais: *"atribuye a su titular un haz de facultades consistente en diversos poderes jurídicos cuyo ejercicio impone a terceros deberes jurídicos [...] A saber: el derecho a que se requiera el previo consentimiento para la*

recogida y uso de los datos personales, el derecho a saber y ser informado sobre el destino y uso de esos datos y el derecho a acceder, rectificar y cancelar dichos datos."(FJ 6º).

Polo tanto, estando recollidos os dereitos fundamentais infrinxidos na normativa vixente non pode xustificar a súa infracción o debate xurídico que os mesmos. Ademais, en este caso, non está acreditado nin o consentimento nin ningún outro suposto de habilitación para a instalación do rexistro da xornada a partir da datos biométricos faciais.

4º) A sentenza xa sinala que a demandada Art & Graphic Packaging SL non aplicou ás súas persoas traballadoras o sistema controvertido (FP 5º). Pero a condena desa empresa é por canto foi quen abonou a instalación, estando ao seu nome as facturas de instalación do sistema de recoñecemento facial. E o art. 177.1 LRXS permite accionar tamén contra que non é o empresario na relación laboral, se existe unha *"conexión directa con las mismas, incluidas las que se formulan contra terceros vinculados al empresario por cualquier título"*. E iso acontece no caso de autos segundo xa indicamos, posto que a empresa Art & Graphic Packaging SL participou na instalación do sistema e abonou o mesmo.

Por todo iso, acollemos só en parte o recurso das empresas demandadas, co único efecto de deixar sen efecto na condena a referencia ao dereito fundamental á intimidade.

CUARTO. Motivos do art. 193 c) LRXS da parte demandante

A parte demandante tamén recorre ao abeiro do art. 193 c) LRXS. Formula os seguintes motivos:

1º.- Infracción dos arts. 50.1 c) ET, e 18 e 24 CE. Argumenta que a empresa instalou sen consentimento das persoas traballadoras un sistema de recoñecemento facial para o rexistro da xornada, o cal non cumpriu ademais coas esixencias dos arts. 6.1 e 35 RXPd. Polo tanto existiu un incumprimento moi grave da empresa que lexítima a extinción da relación laboral. Ademais sinala que a empresa mostrou pasividade na retirada do sistema de recoñecemento facial.

2º.- Infracción dos arts. 50.1 b) ET en relación co 4.2 f) e 29.1 ET. Argumenta que existiu un retraso prolongado e grave no pagamento das nóminas que xustifica a extinción da relación laboral a instancia da persoa traballadora.

Polos citados motivos solicita a revogación da sentenza de instancia en canto rexeitou a extinción indemnizada da relación laboral consonte o art. 50 ET, e o acollemento desa pretensión.

As empresas demandadas, na súa impugnación, solicitan o rexeitamento dos motivos de recurso, por non existir as infraccións alegadas.

Imos acoller os dous motivos de recurso, que pasamos a resolver de xeito conxunto á vista dos seguintes argumentos:

Entendemos que as causas de extinción da relación laboral a instancia da persoa traballadora (art. 50 ET) pódense considerar de xeito conxunto cando, no momento da acción extintiva, coexisten distintos incumprimentos graves da empresa. Neste caso existiron retrasos continuados e reiterados no aboamento do salario (art. 50.1 b) ET), e tamén un incumprimento da empresa coa cal a parte demandante tiña a relación laboral, en tanto vulnerou os seus dereitos fundamentais á propia imaxe e á protección de datos persoais (art. 50.1 c) ET).

En canto ao primeiro, consta no feito probado terceiro que a empresa tiña un acordo coa representación das persoas traballadoras para o aboamento dos salarios antes do día 5 de cada mes, e para tratar de conseguir incluso que fose o día 1. Pero o certo é que, dende o 1 de xaneiro de 2024 e hasta a nómina de marzo de 2025, isto é, durante un ano e tres meses, existiron retrasos reiterados e continuados, posto que a parte traballadora recibiu as súas nóminas nas datas sinaladas no FP 4º, parágrafo segundo. Incluso o aboamento do 3 de outubro é con retraso, pois nese mes constan dous pagos un do 3 de outubro e outro do 18 de outubro, polo que entendemos que o primeiro, a falta doutro dato, é a nómina do mes de agosto que non foi abonada antes do 5 de setembro.

Dado que o acordo era que o aboamento fora antes do día 5 de cada mes, tiña que estar feito o día 4 como moi tarde, polo que existen, co FP 4º, parágrafo segundo, retrasos de: 5 días, 7 días, 8 días, 23 días, 17 días, 18 días, 19 días, 29 días, 14 días, 9 días, 12 días, 9 días, e 10 días.

O incumprimento é polo tanto grave e significativo, tanto pola súa duración durante máis dun ano, como pola entidade do retraso en moitos casos de moito máis de dez días. Pero,

en especial, cando a propia finalidade do acordo coa empresa era conseguir que o aboamento fose o día un de cada mes.

En todo caso, ao incumprimento sinalado ten que sumarse que existiu, como xa explicamos no anterior fundamento xurídico, unha vulneración dos dereitos fundamentais da traballadora, coa instalación dun sistema de recoñecemento facial con datos biométricos. Ademais a propia representación das persoas traballadoras xa sinalou á empresa a necesidade de retirar o sistema de rexistro horario na reunión do 30 de xaneiro de 2024, no obstante o cal a empresa continuou co sistema de recoñecemento facial ata o 20 febreiro do 2025, durante máis dun ano polo tanto. E dicir, non só vulnerou os dereitos fundamentais da traballadora, senón que persistiu nesa vulneración aínda despois de que a representación das persoas traballadoras comunicara a situación e esixen a retirada.

Por todo iso, entendemos que existe unha situación de graves incumprimentos pola empresa empregadora que xustifica a extinción da relación laboral coa indemnización do despedimento improcedente (art. 50.2 ET). A condena á extinción da relación laboral e ao aboamento da indemnización correspondente alcanza só a empregadora Make Packing SL, posto que é a que mantén a relación laboral, unha vez que a sentenza rexeitou a existencia dun grupo de empresas con relevancia laboral, o cal non foi discutido en suplicación.

O art. 56 ET sinala a seguinte indemnización: *"treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades [...]"*.

Posto que a relación laboral comezou antes do 12-2-2012 é de aplicación a DT 11ª ET.

Neste caso o salario mensual é de 2117,81 euros -non controvertido e FP 1º- e a antigüidade do 21-8-2007 (FP 1º). A data da extinción é a da presente sentenza do día 15 de xaneiro de 2026.

No cálculo da indemnización os días que exceden dun mes completo compútanse como se a prestación fose durante toda a mensualidade (SSTS do 20 de xullo de 2009, recurso 2398/2008; 20 de xuño de 2012, recurso 2931/2011; e 6 de maio de 2014, recurso 562/2013).

A indemnización é de 46.266,90 euros, calculados segundo o disposto no art. 56 ET, en relación coa DT 11ª ET (54 meses no primeiro período e 168 meses no segundo período da citada disposición transitoria).

QUINTO. Custas

No recurso da traballadora non procede condena en custas, pois a parte recorrente ten o dereito de asistencia xurídica gratuíta e o recurso é acollido en parte (arts. 235.1 e 21.4 LRXS e art. 2 Lei de asistencia xurídica gratuíta).

No recurso das empresas demandadas non procede tampouco condena en custas, posto que ó recurso é acollido en parte (art. 235.1 LRXS). Acollido en parte o recurso, acordamos a devolución do depósito para recorrer, unha vez esta sentenza sexa firme (art. 203.3 LRXS). Mantemos a consignación, a cal terá o destino legalmente previsto unha vez esta sentenza sexa firme (art. 204.1 LRXS).

DECIDIMOS

1.- ACOLLEMOS en parte o recurso de suplicación interposto por Make Packing SL e Art & Graphic Packaging SL contra a sentenza do 9 de abril de 2025 do Xulgado do Social nº 1 de Vigo, pronunciada nos autos nº 119/2025, seguidos a instancia de Dª. Victoria. Todo iso cos seguintes pronunciamentos:

1.1.-Deixamos sen efecto a declaración de existencia de vulneración do dereito fundamental á intimidade, pero mantendo o restante pronunciamento declarativo por vulneración de dereitos fundamentais e a condena solidaria á indemnización por danos (7501 euros).

1.2.-Acordamos a devolución do depósito para recorrer, unha vez esta sentenza sexa firme.

1.3.-A consignación terá o destino legalmente previsto unha vez esta sentenza sexa firme (art. 204.1 LRXS).

1.4.-Sen custas.

2.- ACOLLEMOS en parte o recurso de suplicación interposto por D^a. Victoria contra a sentenza do 9 de abril de 2025 do Xulgado do Social nº 1 de Vigo, pronunciada nos autos nº 119/2025, seguidos contra Make Packing SL e Art & Graphic Packaging SL. Todo iso revogando en parte a sentenza de instancia e acollendo en parte a demanda cos seguintes pronunciamentos:

2.1.-Declaramos a extinción da relación laboral na data da presente sentenza coa condena de Make Packing SL ao aboamento dunha indemnización pola extinción da relación laboral de 46266,90 euros.

2.2.-Sen custas.

MODO DE IMPUGNACIÓN:Faise saber ás partes que contra esta sentenza cabe interpoñer recurso de Casación para Unificación de Doutrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala dentro do improrrogable prazo de dez días hábiles inmediatos seguintes á data de notificación da sentenza. Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou beneficiario do réxime público de seguridade social deberá efectuar:

- O depósito de 600 € na conta de 16 díxitos desta Sala, aberta no Banco de SANTANDER (BANESTO) co nº **1552 0000 37 seguida do catro díxitos correspondentes ao nº do recurso e dous díxitos do ano do mesmo.**

- Así mesmo se hai cantidade de condena deberá consignala na mesma conta, pero co código **80**no canto do 37 ó ben presentar aval bancario solidario en forma.

- Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, haberá que emitila á conta de vinte díxitos **0049 3569 92 0005001274** e facer constar no campo "Observacións ó Concepto da transferencia" os 16 díxitos que corresponden ao procedemento **(1552 0000 80 ó 37**** ++)**.

Así por esta nosa sentenza, pronunciámolo, mandamos e asinamos.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).